Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede:

Sección: **4**

Fecha: //

Nº de Recurso: **470/2024**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

ADMINISTRACION DE JUSTICTA

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4 A CORUÑA

SENTENCIA: 00497/2024 ADMINISTRACIÓN DEXUSTIZA Modelo: N10250 DE LAS CIGARRERAS, 1 (A CORUÑA) Teléfono: NUM000 Fax: NUM001 Correo electrónico:

Equipo/usuario: MP N.I.G. 15030 42 1 2023 0003125 ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000470 /2024 Juzgado de procedencia: XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 15 de A CORUÑA Procedimiento de origen: F02 FAML.GUARD,CUSTDO ALI.HIJ MENOR NO MATRI NO C 0000194 /2023

Recurrente: Sara

Procurador: MARIA TERESA MARTINEZ ALMELA

Abogado: Recurrido: Sabino, MINISTERIO FISCAL

Procurador: ADRIANA RODRIGUEZ ALVAREZ, Abogado: LUIS MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ-ALARCOS, SENTENCIA

N 497/2024 AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION CUARTA-CIVIL-MERCANTIL Ilmos/as.Magistrados:

D. PABLO GONZALEZ-CARRERO FOJON, Pte. D. RAFAEL-JESUS FERNANDEZ-POTO GARCIA D? LORENA FERNÁNDEZ MARQUEZ

En A CORUNA, a catorce de octubre de dos mil veinticuatro VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de FAML.GUARD,CUSTDO ALI.HIJ MENOR NO MATRI NO C 0000194 /2023, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 15 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000470 /2024, en los que aparece como parte apelante, Sara, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA TERESA MARTINEZ ALMELA, asistido por el Abogado D. ROSA MARIA MARTINEZ ALMELA, y como parte apelada, Sabino, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. ADRIANA RODRIGUEZ ALVAREZ, asistido por el Abogado D. LUIS MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ-ALARCOS, MINISTERIO FISCAL, sobre RUPTURA CONVIVENCIAL

Y ADOPCION JUDICIAL DE MEDIDAS PATERNO-FILIALES.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N* 15 DE A

CORUÑA, se dictó resolución con fecha 07-05-2024, en el procedimiento del que dimana este recurso, que contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento:

“Se acuerda la adopción de las siguientes medidas personales y patrimoniales en relación con la menor María Purificación:

* Se atribuye la guarda y custodia de la hija menor de edad María Purificación al padre, siendo la patria potestad compartida.

* Con relación al régimen de visitas, dada la distancia existente entre [REDACTED] y A Coruña, se establece que la madre podrá comunicarse a través de videoconferencia con su hija todos los días durante media hora en momentos en los que no perturbe ni el descanso ni las actividades de la menor, así como que si la madre viene a Coruña algún fin de semana, podrá estar con su hija desde el viernes al domingo, preavisando al padre con 72 horas de antelación. En los periodos vacacionales la madre podrá estar en compañía de su hija todas

las vacaciones de Semana Santa, así como las vacaciones de Carnavales íntegramente, mientras que en las vacaciones de Navidad la madre podrá estar en compañía de su hija desde las 11 horas del 23 de diciembre hasta las 20 horas del 30 de diciembre en los años pares, y desde las 11 horas del 31 de diciembre a las 20 horas del 7 de enero en los años impares, y en las vacaciones de verano la madre podrá estar en compañía = de su hija desde el día después a finalizar las clases hasta ADMINISTRACION el 31 de julio en los años pares y desde el 1 de agosto hasta DE JUSTICIA dos días antes del inicio del curso escolar en los años impares.

* Se establece que la madre ha de abonar en concepto de alimentos a favor de su hija María Purificación la cantidad de 175 euros mensuales, a ingresar dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que designe el padre, cantidad que se ADMINISTRACIÓN actualizará anualmente conforme a las variaciones que DEXUSTIZA experimente el IPC.

* Que los gastos extraordinarios que genere la hija menor de edad han de ser sufragados por ambos progenitores por partes iguales, previa consulta y justificación.

No se hace expresa imposición de costas a ninguna de las partes.”

SEGUNDO. - Dicha resolución fue recurrida, y elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, fue señalada audiencia para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.

TERCERO.- Ha sido Magistrado/a Ponente el/la Ilmo/a.

D./D*. LORENA FERNÁNDEZ MÁRQUEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. Resolución en primera instancia y recurso de apelación La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº15 de A Coruña regula las relaciones paternofiliales entre los litigantes con respecto a la hija que tienen en común, María Purificación, nacida el NUM002 de 2021. Procedimiento que se resolvió, como hemos indicado en los antecedentes de hecho de esta resolución, atribuyendo al padre la guarda y custodia de la menor, con ejercicio conjunto de la patria potestad y establecimiento de un régimen de visitas a favor del progenitor no custodio; se fija una pensión de alimentos de 175 euros a cargo de la madre y una contribución por partes 1guales para sufragar los gastos extraordinarios.

El recurso de apelación interpuesto por la Sra. Sara combate la atribución de la guarda y custodia al padre, invocando una falta absoluta de valoración de la prueba. Alega que la sentencia recurrida se limita a mantener la situación de hecho que el propio Juzgado validó en su Auto de medidas provisionales y solicita se atribuya a la madre la guarda y custodia de la menor, por ser ésta la medida que mejor protege el interés de María Purificación, fijando un régimen de visitas a favor del padre y estableciendo una pensión a cargo de éste por importe de 200 euros mensuales.

SEGUNDO. - Antecedentes relevantes Antes de entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en el recurso resulta relevantes exponer los hechos siguientes:

Los ahora litigantes, que venían conviviendo en [REDACTED] desde el año 2016, se trasladan a A Coruña en el año 2018 porque Don Sabino tiene una oferta de trabajo como instalador y mantenedor de ascensores (sector en el que ya trabajaba en [REDACTED]). Doña Sara, de cuya vida laboral se desprende que al menos de 2014 siempre había trabajado en laboratorios y clínicas, viene con él y, tras cuatro contratos de escasa duración en este sector, nace su hija María Purificación, el [REDACTED] de 2021. En mayo de 2022 encuentra trabajo en un supermercado y enlaza varios contratos temporales.

Los primeros días de 2023 se produce la ruptura de la pareja, pese a lo cual siguen conviviendo hasta que él encuentra un piso de alquiler. El 19 de febrero de 2023 finaliza el contrato de trabajo de Doña Sara en el supermercado [REDACTED] y el 1 de marzo Don Sabino se muda a su nuevo piso. Desde ese día los progenitores vinieron ejerciendo una guarda y custodia compartida de hecho, dividiendo el tiempo de estancia con la menor por semanas. El 6 de marzo [REDACTED]

Sara se inscribe como demandante de empleo. A principios de abril y coincidiendo con la Semana Santa la madre viaja a [REDACTED] con la niña y encuentra un trabajo como [REDACTED] en una clínica, donde empieza a trabajar el [REDACTED] de abril, pasando a residir con los abuelos maternos en la misma localidad.

El 9 de mayo Sabino viaja a [REDACTED] con motivo del fallecimiento de su abuela y pasa dos semanas con su hija. Los progenitores acuerdan por escrito que el padre pueda disfrutar de = = la menor desde el 15 de julio hasta el 16 de septiembre; [REDACTED] comprometiéndose el padre a recogerla en el domicilio

materno y la madre a recogerla en el domicilio paterno. El padre recoge a la niña según lo acordado, pero el 16 de septiembre el padre no se la entrega a la madre, inscribiendo a su hija en la misma guardería a la que venía asistiendo cuando ambos progenitores residían en A Coruña. La vista de medidas provisionales estaba señalada para el 2 de octubre. [REDACTED]

[REDACTED] Mediante Auto de 3 de octubre de 2023, se decide “mantener la situación de hecho” y atribuir la custodia al padre con el siguiente razonamiento: “la menor ha nacido en Coruña y ha estado acudiendo a la guardería en estos dos años de vida, siendo que ha sido la madre la que por una decisión personal ha decidido marcharse a [REDACTED]. Razonamiento al que se remite la sentencia que ahora se recurre, la que fija las medidas definitivas tras la vista celebrada el 6 de mayo de 2024. Dice la sentencia, de fecha 7 de mayo, que “a la vista del resultado de las pruebas que se han practicado y toda vez que no se ha acreditado ninguna circunstancia nueva y distinta de las que se tuvieron en cuentas a la hora de establecerse las medidas provisionales”.

TERCERO.- Intereses en conflicto En el presente procedimiento se ha producido la acumulación de las demandas presentadas por ambos progenitores; la del padre el 13 de febrero y la de la madre el 21 de abril de 2023. En las dos demandas se pide como petición principal la guarda y custodia compartida y, como petición subsidiaria, una guarda y custodia exclusiva.

Para abordar las cuestiones sometidas a nuestro examen debemos partir del conflicto de intereses que subyace en este asunto: de una parte el interés o derecho de la madre de cambiar su residencia, por otro lado el derecho del padre de mantener la situación de convivencia con su hija y, finalmente, el interés superior de la menor. Y en la decisión que se adopte debe prevalecer siempre el interés de la menor;

es decir, el conflicto de intereses que se plantea debe ser resuelto de forma que el interés y necesidades de la hija quede menos comprometida.

Nos encontramos, sin duda, ante una materia muy delicada.

Es por ello que esta Sala acordó convocar una comparecencia para oír a las partes y tratar de favorecer la adopción de un acuerdo. Acuerdo que hubiera constituido una mejor decisión que la que ahora tenemos que adoptar en esta alzada, pero que las partes no pudieron o no quisieron alcanzar y que perjudica claramente el interés de María Purificación. Y es que en la valoración de las concretas circunstancias concurrentes no sólo inciden factores objetivos, sino también otros subjetivos o afectivos, personales y de tipo familiar que pueden dar lugar a distintas visiones acerca de cuál sea la mejor solución al conflicto.

Por ello, es importante tener en cuenta, como antes apuntábamos y como recuerda la STC 178/2020, de 14 de diciembre, que en la adopción de medidas que afecten a menores siempre ha de prevalecer el interés superior de éstos y no el de los progenitores (arts. 90, 92.8, 94 y 103.1 del cCódigo Civil y art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño).

El principio del interés superior de los menores es un criterio jurídico indeterminado, a aplicar según las circunstancias de cada caso, aunque ha venido a ser concretado y desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en el sentido de que se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, se protegerá la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y afectivas; se ponderará el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo; la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten y a que la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

La ley no establece criterios o parámetros que faciliten una concreción del interés del menor al tratar este tipo de cuestiones. Y el Tribunal Supremo, en supuestos de cambio de residencia de uno de los progenitores, únicamente se refiere a la ponderación de la necesidad y proporcionalidad del cambio de residencia y que en función de ello se ha de determinar el régimen de guarda y de visitas (STS 6811/2012, de 26 de = octubre y STS 4072/2014, de 20 de octubre).

[REDACTED] La Comisión Europea de Derecho de familia ha elaborado unos Principios de Derecho Europeo de Familia relativos a la responsabilidad parental, en cuyo capítulo V bajo la rúbrica de “Contenido de la responsabilidad parental” (principio 3:21 “Cambio de residencia”) relaciona como criterios de ponderación para resolver sobre este cambio: a) la edad y la opinión del niño; b) el derecho del niño a mantener relaciones [REDACTED] personales con los otros titulares de la responsabilidad parental; c) la capacidad y voluntad de los titulares de la responsabilidad parental para cooperar; d) la situación personal de los titulares de la responsabilidad parental; e) la distancia geográfica y las facilidades de acceso; f) la libre circulación de personas.

En definitiva y partiendo también de los criterios relacionados por la literatura científica en el ámbito de la psicología, hay que ponderar los diferentes intereses en juego

-los del niño, los de los padres y los de orden público- y, en concreto, la vinculación con la figura parental que quiere el cambio, la motivación legítima de tal progenitor o progenitora, la implicación del otro, la edad del menor, la capacidad de adaptación del menor, la familiaridad del menor con el lugar del traslado, la garantía de mayor bienestar para el menor derivada del bienestar de su cuidador, la posibilidad del mantenimiento de un régimen de relación suficiente con el progenitor que se queda, la opinión del niño teniendo en cuenta su edad y madurez, las propuestas respecto a los arreglos prácticos de la reubicación (alojamiento, educación y empleo), los motivos a favor y en contra de la reubicación cuando sea importante para la determinación del resultado, cualquier antecedente de violencia o abuso familiar, el impacto que producirá la concesión o la negación de la reubicación en el niño, en el contexto de su familia y que es lo que resulta menos perjudicial.

En cualquier caso, la doctrina expuesta en ningún caso exonera de la carga de probar el beneficio de la medida que se adopte desde la concreta perspectiva del interés superior del menor. Y aquí es donde, entendemos, resulta cuestionable la decisión adoptada en la primera instancia: ni en sede de medidas provisionales ni a la hora de adoptar las medidas definitivas se ha razonado que las mismas resulten las más beneficiosas para el interés superior de la menor, sino que la decisión adoptada se presenta como una sanción al progenitor que cambió su residencia y la de la menor sin el consentimiento del otro.

CUARTO.- Interés superior de la menor Del conjunto de las actuaciones se desprende que ambos litigantes estiman como más conveniente para la menor la custodia compartida, con el matiz de que cada uno de los progenitores pretendía que fuera el otro el que cambiase su residencia para hacerla posible. Ambos reconocen expresamente las habilidades parentales del otro y no hay indicio alguno en autos que nos lleve a dudar de ello. La pretensión de custodia individual era la petición subsidiaria en defecto de tal acuerdo, que, en perjuicio de la menor y relaciones familiares, las partes no han sido capaces de alcanzar, a pesar de que han demostrado tienen capacidad para ello.

El Tribunal Supremo viene descartando el establecimiento de un sistema de guarda y custodia compartida cuando los progenitores residan en poblaciones distintas, ello por el perjuicio que el constante cambio de ubicación en el ejercicio de la misma puede suponer para el menor. En estos casos, dice, aunque concurren varios de los requisitos que normalmente habrían de dar lugar a su establecimiento, existe una circunstancia que lo desaconseja por suponer una alteración de la vida normal de la menor, sobre todo cuando ya alcanza edad escolar. En esta línea, en un caso en que la distancia de residencias respectiva era de 400 km, la STS 58/2020, de 28 de enero razona “la imposibilidad de afrontar un sistema de custodia compartida con menores en edad escolar, con una distancia considerable entre los domicilios de los custodios, lo que acarrea un desarraigo de la menor, su sometimiento a cambios intermitentes de colegios y de sistema sanitario, incluso en este caso, con diferencias lingüísticas en su proceso de aprendizaje”. Y en el caso que nos ocupa, la distancia entre los domicilios de los progenitores se erige en circunstancia impeditiva del régimen de custodia compartida

Una vez descartada la opción que mejor salvaguarda el interés superior de María Purificación, debemos revisar la valoración probatoria que ha llevado al juzgador de instancia a atribuir la guarda y custodia de la menor al padre, para determinar si es la medida que mejor protege el interés de aquélla.

El Auto de medidas provisionales, de fecha 3 de octubre de 2023, decide “mantener la situación de hecho” y atribuir la custodia al padre con el siguiente razonamiento: “la menor ha nacido en Coruña y ha estado acudiendo a la guardería en estos dos años de vida, siendo que ha sido la madre la que por una decisión personal ha decidido marcharse a . Escuto razonamiento al que se remite la sentencia que ahora se recurre cuando establece que “a la vista del resultado de las pruebas que se han practicado y toda vez que no se ha acreditado ninguna circunstancia nueva y distinta de las que se tuvieron en cuenta a la hora de establecerse las medidas provisionales”. Es decir, la sentencia se limita a reproducir la solución adoptada en sede de medidas provisionales sin razonar nada nuevo. Solo se añade que “ambos progenitores son buenos padres” y que “la menor esta convenientemente atendida y cuidada por su padre”.

Por tanto, tal y como sostiene la recurrente, en ninguna de las dos resoluciones se analiza el conjunto de factores objetivos y subjetivos que integran el concepto de interés superior del menor, sino que sólo se valora el “statu quo”, un statu quo que ambos progenitores han alterado por la vía de hecho. Por lo que debemos, en esta alzada, llevar a cabo dicha valoración.

Recordemos que ambos progenitores son de la [REDACTED] y que es allí donde ambos residían desde el año 2016 y donde se encuentra su núcleo familiar. Es el trabajo de Don Sabino (como instalador y mantenedor de ascensores) el que determina que ambos abandonen [REDACTED] en el año 2018 y fijen su residencia en A Coruña. Una vez aquí Doña Sara encuentra trabajo en un supermercado, trabajando a turnos y con contratos temporales; Don Sabino, por su parte, ha cambiado de empresa al menos en una ocasión desde entonces. El 25 de septiembre de 2021 nace María Purificación y un año más tarde (en las Navidades de 2022) se produce la ruptura de la pareja. La

menor contaba con un año y medio cuando, tras la finalización del último contrato temporal de Doña Sara (el 19 de febrero de 2023), ésta encuentra un trabajo en [REDACTED] y decide marcharse con la niña; se trata de un contrato indefinido en una clínica [REDACTED] con horario de 08:00 a 16:00h. Don Sabino no cuenta con ningún apoyo familiar en A Coruña.

Como señala la jurisprudencia, “el cambio de residencia unilateralmente acordado es reprochable, pero ello no puede acarrear una sanción que perjudique el interés de la menor” (SSTS 230/2018, de 18 de abril; 58/2020, de 28 de enero). Y la sentencia recurrida sólo se funda en este hecho para atribuir la custodia al padre, cuando idéntico reproche debe hacerse al mismo, quien aprovechando el disfrute de un período vacacional con la menor (acordado de mutuo acuerdo por los progenitores cuando madre e hija ya residían en [REDACTED], no la reintegra al domicilio materno a la finalización del mismo. Así, el Auto de medidas provisionales dictado quince días después preserva un statu quo creado por la vía de hecho, statu quo que luego consolida la sentencia recurrida sin mayor argumentación. Este criterio resulta admisible en otros ámbitos, como pueden ser el de la tutela sumaria de la posesión, pero no en la materia que nos ocupa, donde lo que debe tutelarse es el interés del menor.

La STS 482/2018, de 23 julio 2018, dictada en un supuesto en el que la madre (que tenía atribuida la guarda y custodia de su hija) traslada su residencia sin el consentimiento del otro progenitor, resuelve atribuir la custodia al padre valorando la inexistencia de razón objetiva que justificara el cambio de criterio de la madre respecto al traslado de la residencia y que dicha decisión aparecía como resultado de su postura poco favorecedora del contacto entre padre e hijo o de la poca importancia atribuida a tal relación junto con la inexistencia de prueba de que el cambio favoreciera al menor.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, y buscando el interés superior de María Purificación, debemos examinar dos aspectos: la justificación de la decisión de la madre apelante de cambiar su lugar de residencia debido a su acceso a un nuevo puesto de trabajo y si la custodia materna con domicilio de la menor en [REDACTED] se ofrece como la alternativa más adecuada para la misma frente a la custodia paterna en A Coruña. Y entendemos que el cambio de residencia de la madre no resulta caprichoso ni arbitrario. No le es reprochable que, tras la pérdida de un = trabajo temporal en A Coruña y hallar un trabajo mejor en [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] (contrato indefinido y en turno de mañana), la misma decidiera trasladarse allí. Tales circunstancias bastan para estimar que el traslado de la apelante no obedeció a razones distintas que el legítimo interés profesional.

Respecto al interés superior de la menor, debemos indagar cuál de las dos opciones de custodia preserva en mayor medida el desarrollo emocional, educativo y de personalidad de María Purificación, [REDACTED] sin impedir el mantenimiento de una relación con el otro progenitor. Si bien, como decíamos, ambos progenitores tienen capacidad para desarrollar la responsabilidad parental y la menor tiene vínculo afectivo con los dos, es la madre la que cuenta con un mejor horario laboral y también con apoyos familiares que permiten cubrir las necesidades de la menor. El padre, en cambio, no cuenta con ningún apoyo y ha tenido que solicitar la reducción de jornada para poder cuidar de su hija. En la [REDACTED], además, María Purificación tendría contacto con su familia extensa, lo que no ocurre en A Coruña; y su corta edad (acaba de cumplir tres años) impide, por otro lado, apreciar un arraigo en esta ciudad y constituye una ventaja para su adaptación a un posible cambio. No podemos olvidar tampoco la mayor facilidad del padre para encontrar un trabajo de instalador en la [REDACTED] y que no ha quedado acreditado el arraigo del mismo en A Coruña; no alega ningún motivo, además del laboral, por el que quiera permanecer aquí (su núcleo familiar está en la [REDACTED]).

La ponderación de todas estas circunstancias conduce a la Sala a revocar la decisión adoptada en la sentencia. Se prevé afectación o perjuicio emocional para María Purificación tanto si se separa de la madre como si se separa del padre, ya que ambos progenitores han estado siempre presentes en su cuidado, pero el resto de las circunstancias valoradas nos conducen al convencimiento de que la menor se encuentre en mejor situación de bienestar físico y emocional si se está rodeada y apoyada por su familia extensa. El vínculo paterno-filial no consideramos que esté en peligro si se prevé un amplio régimen de visitas y estancias con el padre y si ello va acompañado de una voluntad de cooperar por parte de ambos progenitores (la capacidad de hacerlo ha

quedado demostrada con los acuerdos puntuales que, a pesar de todo, han sido capaces de ir = alcanzando desde que se produjo la ruptura). En ningún momento estamos priorizando los intereses de la madre, pues tomaríamos la misma decisión si la situación fuese a la inversa. Lo único que estamos priorizando es la estabilidad y desarrollo de la menor. Y confiamos en que los progenitores puedan llegar a un acuerdo que haga viable la guarda y custodia compartida, sistema que tanto ellos como nosotros sabemos resulta la medida más beneficiosa para el interés superior de María Purificación.

QUINTO.- Régimen de visitas con el progenitor no custodio Debido a la distancia actualmente existente entre los domicilios de los progenitores, el padre podrá disfrutar de la compañía de su hija un fin de semana al mes; será él quien elija el fin de semana en cuestión y se lo comunicará a la madre con al menos quince días de antelación. Si coincidiese algún puente o festivo escolar, el padre podrá extender la estancia con su hija a estos días.

Respecto a los períodos extraordinarios, las vacaciones escolares de Semana Santa y Carnaval corresponden íntegramente al padre. Y el resto de períodos vacacionales (verano y Navidad) se repartirán en tres mitades, correspondiendo al padre dos tercios de cada uno de ellos. La madre elegirá su tercio en los años impares y el padre sus dos tercios en los años pares. Esta elección también se comunicará al otro progenitor con la mayor antelación posible.

SEXTO.- Pensión de alimentos La sentencia recurrida fijó una pensión de alimentos de 175 euros mensuales a cargo de la madre. Y ésta ahora solicita que se fije a cargo del padre una pensión de 200 euros. De las nóminas aportadas por éste se desprende que, antes de la reducción de jornada, Don Sabino percibía unos 1900 euros netos mensuales; sólo bajan de esta cifra las nóminas de junio y diciembre de 2022, 0

llegando la de septiembre del mismo año a casi 2400 euros. También consta acreditado que percibe dos pagas extras de unos 1400 euros, prorrateando las cuales obtenemos un salario medio de 2133 euros.

Tras la reducción de jornada, que se hizo efectiva el 1 de septiembre de 2024, se reduce en un 10,50% la jornada y el salario del trabajador, por lo que su salario ahora (y mientras se mantenga la reducción de jornada) rondará los 1900 euros.

Por tanto, consideramos ajustada una pensión de 200 euros mensuales. Ambos progenitores deberán sufragar, por mitad, los gastos de desplazamiento para las visitas del progenitor no custodio, tal y como establece la doctrina del Tribunal Supremo (STS de 26 de mayo de 2014).

SÉPTIMO.- Costas y depósito No es procedente hacer especial imposición de costas en asuntos de esta naturaleza.

Al ser el recurso estimado se acordará la devolución del depósito constituido para recurrir (disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, apartado 8).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

ESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la representación procesal de Doña Sara contra la sentencia de fecha 7 de mayo de 2024, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 15 de A Coruña dentro de los autos de Guarda, custodia y alimentos 194/2023, que revocamos para atribuir a la madre la guarda y custodia de la menor y establecer a favor del progenitor no custodio el régimen de visitas detallado en el Fundamento de Derecho Quinto de la presente resolución, quien deberá abonar una pensión de alimentos de 200 euros mensuales.

Confirmamos el resto de los pronunciamientos de la resolución recurrida.

No hacemos especial imposición de las costas de esta alzada.

Decretamos la devolución del depósito constituido para recurrir.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante la Sala 1* del Tribunal Supremo, que habrá de fundarse en la infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional, y que habrá de interponerse en el plazo de veinte días a partir de su notificación. El escrito de interposición se ajustará a las prescripciones del artículo 481 de la LEC, así como a las que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo tiene establecidas y han sido publicadas en el BOE. Al interponer el recurso habrá de acreditarse la constitución del depósito legalmente exigido.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En caso de interponer recurso de casación, su presentación se tiene que adaptar al acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo del 8.9.2023, publicado en el BOE del 21.9.2023, el cual adjuntamos.

En los escritos de interposición y oposición del recurso de casación, las partes deben manifestar el cumplimiento de todos los requisitos a los que hace referencia el citado acuerdo. La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.